

043/2025**I**

La Orden que se informa regula, según el artículo 1, los servicios de Prevención de la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal como prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, estableciendo también los requisitos que deben cumplir las entidades prestadoras, sean públicas o privadas, que gestionen centros especializados en la Comunidad Autónoma.

En el artículo 2 se define la naturaleza de estas prestaciones, dirigidas a prevenir o mitigar situaciones de dependencia y a promover la autonomía personal. La Prevención de la Dependencia es una prestación complementaria, dirigida a toda la población, mientras que la Promoción de la Autonomía tiene carácter esencial y va destinada a personas en situación de dependencia.

El artículo 3 detalla las finalidades de ambas prestaciones: por un lado, evitar o ralentizar el deterioro funcional mediante programas de salud y rehabilitación; por otro, fortalecer la capacidad de las personas para tomar decisiones y desenvolverse con independencia. Se contemplan actuaciones como la terapia ocupacional, la estimulación cognitiva, la atención temprana o la habilitación psicosocial.

El artículo 4 enumera los objetivos de estos servicios: mejorar la calidad de vida, fomentar la independencia funcional y diseñar una planificación personalizada centrada en el usuario y su entorno. En esa línea, el artículo 5 establece los principios del modelo asistencial: atención centrada en la persona, respeto a su dignidad y capacidades, intervención interdisciplinar y decisiones compartidas.

En cuanto a los destinatarios (art. 6), los servicios de Prevención se orientan a personas en riesgo de dependencia, mientras que los de Promoción se destinan a quienes ya tienen un grado reconocido y están incluidos en un Programa Individual de Atención (PIA). El acceso a la Prevención (art. 7) se produce previa solicitud escrita y baremación técnica; en cambio, el acceso a la Promoción (art. 8) se incorpora directamente en el PIA, pudiendo prestarse también en forma de prestación económica vinculada.

El artículo 9 describe el régimen común de prestación de ambos servicios en centros públicos: atención horaria mínima y máxima mensual, sesiones individuales o grupales, intervención de un profesional de referencia y elaboración de un Plan de Atención y Vida desde el primer mes, todo ello documentado en un expediente personal.

Respecto a los requisitos para entidades prestadoras, el artículo 10 establece la obligatoriedad de autorización administrativa previa, que debe solicitarse conforme al procedimiento del artículo 11. Este incluye la presentación de una memoria descriptiva y diversa documentación técnica y organizativa para acreditar el cumplimiento de requisitos.

Finalmente, el artículo 12 fija las obligaciones documentales de las entidades autorizadas, incluyendo el mantenimiento de registros de usuarios, reglamento interior, planes de atención, expedientes personales, contratos, pólizas de seguro y documentación sobre el personal. Se garantiza la confidencialidad de los datos y se exige que las intervenciones estén basadas en evidencia científica y la información sea accesible para usuarios y familias.

La Orden se acompaña de cuatro Anexos que precisan los requisitos materiales y funcionales exigidos a las entidades —públicas o privadas— que deseen prestar los servicios de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal. Se prevé la utilización de espacios ya existentes o nuevos, siempre que reúnan condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad y funcionalidad (Anexo I). Asimismo, se establecen los requisitos funcionales relacionados con la organización del servicio, los perfiles profesionales, los ratios de atención y la asunción de determinados compromisos (Anexo II).

Desde una perspectiva documental y procedimental, destaca la incorporación de modelos normalizados de solicitud tanto para la autorización e inscripción registral de los servicios como para el acceso a los mismos por parte de la ciudadanía (Anexo III). La existencia de un Registro específico implicará el tratamiento de datos personales de diversa naturaleza, lo que hace especialmente relevante la observancia del marco normativo en materia de protección de datos. Finalmente, se fijan criterios técnicos de baremación para priorizar el acceso a los servicios en centros públicos, agrupados en factores demográficos, clínicos, sociales y sanitarios (Anexo IV).

Las previsiones contenidas en la Orden que se informa se enmarcan en el desarrollo de lo dispuesto en materia de servicios sociales, por la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que en su artículo 3 define el sistema como el conjunto integrado de recursos y prestaciones públicas y privadas destinadas a la atención social. Dentro de este sistema, los servicios de Prevención de la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal figuran como ámbitos de actuación destacados, incluidos

en el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, desarrollado reglamentariamente por el Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón.

Así, la Ley 5/2009, de 30 de junio, en su artículo 36.3.e), contempla dichos servicios como prestaciones especializadas orientadas a mantener o mejorar la autonomía personal de las personas y apoyar a sus cuidadores, favoreciendo la permanencia en el entorno habitual. Por su parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, los incluye en su catálogo de servicios, desarrollados mediante los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de fechas 3 de agosto de 2011 y 16 de julio de 2014.

A su vez, las citadas normas constituyen un claro desarrollo de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva de “acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial (artículo 71.34.^a).

Habida cuenta del objeto de la Orden que se informa, **se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal**, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda

persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que: *“Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”*

A su vez, conforme a lo establecido en el **artículo 4.7 RGPD**, es necesario identificar con precisión al responsable del tratamiento, entendido como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento”. No hacerlo compromete los principios de responsabilidad proactiva y de transparencia exigidos por la normativa europea en materia de protección de datos.

Sin embargo, del **texto normativo que se informa no se extrae con la claridad exigible quién será el órgano responsable del tratamiento** de los datos personales objeto de la Orden. Si bien en su *Exposición de motivos* se alude a que, tanto el Departamento de Bienestar Social y Familia como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), deben adoptar las medidas necesarias, normativas, procedimentales y técnico-informáticas, para hacer efectiva su aplicación, **no se especifica expresamente en cuál de ellos, o si en ambos, concurre la condición de responsable del tratamiento.**

Esta ambigüedad se reproduce a lo largo del articulado, en el que se contienen diversas menciones al Instituto Aragonés de Servicios Sociales — como entidad que valora las solicitudes, autoriza el acceso a los servicios o gestiona registros—, así como remisiones en los formularios del Anexo III, en los que se señala como destinatario, en algunos casos, al Departamento de Bienestar Social y Familia y, en otros, al propio Instituto.

Tampoco se aclara de forma inequívoca quién ostenta en la actualidad la condición de “*órgano competente en ordenación de servicios sociales*”, expresión genérica utilizada en varias ocasiones a lo largo del texto (por ejemplo, en relación con la autorización de entidades o la inscripción registral), lo que añade incertidumbre sobre la titularidad de competencias clave en relación con el tratamiento de datos personales.

La necesidad de establecer expresamente el órgano responsable del tratamiento no solo deriva de la legislación de protección de datos, sino que se ve reforzada, *a sensu contrario*, por lo previsto en el artículo 3 y en el artículo 36.3 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que atribuyen al sistema de servicios sociales la atención integral especializada y la promoción de la autonomía personal, funciones que implican necesariamente el tratamiento de datos personales, especialmente en el contexto de servicios como los regulados por la presente Orden.

Por todo ello, se sugiere la incorporación de un precepto específico en el que se identifique de manera expresa y unívoca al órgano u órganos responsables del tratamiento, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la conformidad de la Orden con el marco normativo vigente en materia de protección de datos.

III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (La negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Tal y como se ha expuesto, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, en su artículo 36 —Prestaciones de servicio—, comprende la totalidad de los que componen el sistema público de intervenciones realizadas por equipos profesionales, cuya finalidad (apartado 1) es atender situaciones de necesidad social mediante la prevención, la información, el diagnóstico, la valoración, la orientación, la atención doméstica y personal, el acompañamiento social, la mediación, la protección, la promoción, la atención y la inserción de personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades. La regulación de dichos servicios se desarrolla en los apartados 2 y 3 del mencionado precepto.

Las citadas previsiones normativas, establecidas en una norma con rango de ley formal que, a su vez, supone una concreción y desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (La negrita es nuestra)

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el

artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley.**” (La negrita es nuestra)

IV

En el **artículo 7**, sobre el procedimiento de acceso a los servicios de Prevención de la Dependencia, se establece la presentación de solicitud mediante el modelo del Anexo III, lo que implica el tratamiento de datos identificativos, de contacto y de carácter social y económico. La valoración técnica previa para determinar la intensidad del servicio exige además el tratamiento de datos de salud y de circunstancias personales del solicitante.

El **artículo 8**, relativo al acceso al servicio de Promoción de la Autonomía Personal, prevé la incorporación de las personas con grado de dependencia reconocido, en el marco de su Programa Individual de Atención. Ello conllevará la utilización de datos de salud y sociales, así como la revisión y actualización de expedientes, que implica un tratamiento continuado de datos personales.

En el **artículo 9**, referido al régimen común de ambos servicios en centros autonómicos, se establece la obligación de realizar una evaluación multidisciplinar y la elaboración de un Plan de Atención y Vida. Esto supone la recogida de datos médicos, sociales y personales especialmente sensibles, incluyendo historia de vida, preferencias y circunstancias familiares. El mantenimiento de un expediente individual y el seguimiento mediante plataformas informáticas refuerzan el carácter intensivo del tratamiento de datos.

Por su parte, el **artículo 10**, relativo a la autorización administrativa de las entidades que prestan estos servicios, conlleva la tramitación de expedientes que contienen datos identificativos y de representación de las entidades solicitantes, junto con información administrativa y, en su caso, sanitaria. Aunque menos intensivo que en los artículos anteriores, sigue implicando un tratamiento relevante de datos personales.

En cuanto al **artículo 11**, relativo al procedimiento para la solicitud de autorización, regula la presentación de formularios comprensivos de una gran variedad de datos de carácter personal.

Finalmente, el **artículo 12**, establece la obligación de las entidades prestadoras de servicios de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de contar con una amplia documentación relativa tanto a la organización como a las personas usuarias y al personal. Entre esta documentación se incluye un libro registro de usuarios con datos

identificativos y de servicio, un reglamento de régimen interior aprobado por la administración y accesible a usuarios, familiares y personal, un programa general del servicio y un plan de atención y vida individualizado, así como expedientes personales de cada usuario y los contratos de prestación, en los que deben incorporarse cláusulas de confidencialidad y respeto a la intimidad. También deberán disponer de póliza de seguros, organigrama y plantilla con la documentación laboral y formativa del personal, hojas de quejas y sugerencias, y una memoria descriptiva de los servicios, todo ello con especial atención a la protección de datos personales en la gestión de la información de usuarios y profesionales.

En definitiva, de la lectura de estos preceptos resulta evidente que la Orden regula tratamientos sistemáticos y amplios de datos personales, **lo que refuerza la necesidad de precisar con claridad quién ostenta la condición de responsable del tratamiento conforme al artículo 4.7 del RGPD.**

En la recogida y tratamiento de dichos datos deben respetarse los principios de protección de datos recogidos en el **artículo 5** del Reglamento General de Protección de Datos. A los efectos que aquí interesan, el mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refiere a los principios de limitación de la finalidad, minimización y exactitud, limitación del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad:

“5.1 Los datos personales serán:
(...)

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («**limitación de la finalidad**»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («**minimización** de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («**exactitud**»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos,

de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («**limitación del plazo de conservación**»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («**integridad y confidencialidad**»).

Además, en el artículo 12.1 —*in fine*— se exige, en todo caso, la garantía de **confidencialidad y protección de datos** referidos a las personas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos.

A este respecto, no cabe sino referir que la citada mención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, deberá hacerse —asimismo— extensiva al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos. A dichos efectos, se propone la modificación del citado párrafo, pudiendo incorporarse en su lugar otro de igual o similar contenido que el siguiente:

“En todo caso, se exigirá la garantía de confidencialidad y la protección de datos referidos a las personas físicas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos”.

De otra parte, en atención a la citada garantía de confidencialidad, debería establecerse claramente que el acceso a los datos personales de los afectados se encuentra exclusivamente limitado a **personas autorizadas**, previa suscripción del correspondiente **compromiso de confidencialidad**, disponiéndose claramente que dicho acceso corresponderá únicamente a las personas expresamente autorizadas, por el Órgano responsable del tratamiento, en atención a sus propias funciones (artículo 29 RGPD).

De tal modo, se sugiere la inclusión expresa de la obligación de suscribir un compromiso de confidencialidad por parte de quienes acceden a la información personal de los usuarios de los servicios. Así, cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento y tenga acceso a datos personales no podrá tratarlos salvo que haya sido autorizada y se le haya instruido en ello. En la misma línea, el **artículo 32 del RGPD**,

que regula las medidas de seguridad del tratamiento, impone la necesidad de asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas de acceso a datos. Esta exigencia también se encuentra reflejada en el **artículo 28 de la LOPDGDD**, que exige la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de los principios del tratamiento y el deber de confidencialidad del personal con acceso a datos.

Todo lo anterior apunta la necesidad de incorporar un precepto referido al principio de **limitación del acceso a datos personales solo a personas legitimadas**, de acuerdo con el **artículo 5.1.f)** del RGPD, que exige garantizar la seguridad e integridad de los datos personales mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, entre ellas la restricción del acceso solo a personal debidamente autorizado. Asimismo, el acceso debe quedar vinculado al **ejercicio legítimo de funciones**, conforme al principio de *licitud del tratamiento* recogido en el **artículo 6.1.c) y e)** del RGPD (cumplimiento de una obligación legal, o por interés público o ejercicio de poderes públicos), y al **artículo 8 de la LOPDGDD**, que precisa las exigencias normativas del tratamiento de datos por parte de las Administraciones Públicas.

En resumen, con carácter general, las previsiones de los artículos 7 a 12 de la Orden que se informa, respetan las exigencias del artículo 5.1 del RGPD, en tanto que los datos personales tratados resultan limitados a la finalidad prevista, deviniendo adecuados, pertinentes y limitados a dichos fines, y comprendiendo la debida actualización y exactitud de los mismos en función de las diversas circunstancias concurrentes, sin embargo, **se sugiere la necesidad de introducir un nuevo artículo referido a la limitación de acceso a los datos personales, que deberá quedar circunscrito al personal debidamente autorizado a dicho fin por parte del responsable del tratamiento.**

Asimismo, se echa en falta una mención expresa sobre la aplicación de las medidas de seguridad referidas al tratamiento de los datos de carácter personal.

En conclusión, se sugiere la adicción de un nuevo artículo o de un nuevo apartado de un artículo, con una redacción que podría incorporar el siguiente contenido u otro similar:

“El responsable del tratamiento de datos personales adoptará, en todo caso, las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y con el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las medidas de seguridad a adoptar serán técnicas y organizativas y deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

Únicamente podrán acceder a los datos personales objeto de tratamiento a consecuencia de lo dispuesto en esta Orden:

a) El personal adscrito a los centros incluidos en el ámbito de actuación, en el ejercicio legítimo de sus funciones y respecto de las personas adscritas a cada centro o servicio, así como a la promoción de la autonomía personal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Las personas empleadas públicas autorizadas como responsables de la gestión de los servicios y promoción de la autonomía personal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Todas estas personas podrán acceder a los citados datos personales garantizándose la confidencialidad y protección de datos personales. Para ello, las personas a las que se reconoce acceso a dichos datos deben suscribir el correspondiente compromiso de confidencialidad en relación con la información a que tengan acceso.

Las personas titulares de los datos personales tratados podrán consultar únicamente sus datos, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente de protección de datos.”

V

En conclusión, tal y como se ha expuesto en el **Punto II** de este informe, se considera necesario introducir un precepto específico que identifique de manera expresa **al órgano u órganos responsables del tratamiento** de los datos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena adecuación de la Orden al marco normativo en materia de protección de datos.

Asimismo, conforme a lo señalado en el **Punto IV**, se propone reforzar el artículo 12.1 —*in fine*— mediante una referencia expresa tanto **al Reglamento** (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, garantizando en todo caso la confidencialidad y la

protección de los datos personales tratados.

Igualmente, se recomienda incorporar de forma explícita **la obligación de suscribir compromisos de confidencialidad** por parte de todas las personas con acceso a datos personales, **limitando dicho acceso únicamente al personal autorizado por el responsable del tratamiento**, en línea con lo dispuesto en los artículos 29 y 32 del RGPD y en el artículo 28 de la LOPDGDD.

Finalmente, según se ha expuesto en el **Punto IV** de este Informe, se sugiere **la adición de un nuevo precepto referido a la adopción de medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas al riesgo, así como a la limitación de acceso** a los datos personales a personas legitimadas y debidamente autorizadas, todo ello con expresa mención al cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD.